



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia](#).

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia



Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

LA VERDAD PROBATORIA Y SU APLICABILIDAD EN EL MEDIO DE LA DECLARACIÓN DE PARTE: UN PROBLEMA EPISTEMOLÓGICO¹.

Por: Linden Yohana Obando Pinzón²

Trabajo dirigido por: Alejandro Castaño-Bedoya, PhD. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Correo electrónico: acatano@ucatolica.edu.co

Resumen: El presente artículo pretende analizar las complejidades en la aplicación de los “juicios de verdad procesal” en el medio de la declaración de parte. Se indagará sobre los principales elementos de este medio probatorio tanto en el ámbito legal, como en el jurisprudencial y doctrinal. Así mismo, se compararán los supuestos anteriormente mencionados con las teorías de la verdad propuestas por Michelle Taruffo; Juan-Antonio Nicolás y Maria José Frápolli y, Humberto Maturana y Francisco Varela.

Palabras Clave: *Derecho Probatorio; Declaración de Parte; Teorías de la Verdad; Verdad Probatoria.*

THE EVIDENTIARY TRUTH AND ITS APLICABILITY IN THE MEAN OF THE DECLARATION OF PART: AN EPISTEMOLOGICAL PROBLEM.

Abstract: This article aims to analyze the complexities in the application of “trials of procedural truth” in the mean of the declaration of part. It will inquire about the main elements of this mean of proof both in the legal sphere and, the jurisprudential and doctrinal. In addition, the aforementioned assumptions will be compared with the theories of truth proposed by Michelle Taruffo; Juan-Antonio Nicolás & Maria José Frápolli and, Humberto Maturana & Francisco Varela.

Keywords: *Evidentiary Law; Declaration of Part; Theories of Truth; Evidentiary Truth.*

¹ Artículo de Investigación elaborado como Trabajo de Grado para optar al título de Abogada de la Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C., 2021.

² Estudiante de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Correo electrónico: lyobando78@ucatolica.edu.co.

CONTENIDO:

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1. ELEMENTOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN EL DERECHO PROCESAL COLOMBIANO: UN ABORDAJE DESDE SUS ELEMENTOS NORMATIVOS Y DOCTRINALES | 5 |
| 1.1. Elementos Doctrinales de la Declaración de Parte | 5 |
| 1.2. Elementos Normativos de la Declaración de Parte | 9 |
| 2. ASPECTOS JURISPRUDENCIALES DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN COLOMBIA: EVOLUCIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL MEDIO DE PRUEBA | 10 |
| 3. LAS TEORÍAS ACTUALES DE LA VERDAD DENTRO DE LA DECLARACIÓN DE PARTE | 14 |
| 3.1. Las Teorías de la Verdad Desde Nicolás y Frápolli. | 16 |
| 3.2. Las Teorías de la Verdad Desde Taruffo. | 20 |
| 4. EL PROBLEMA EPISTEMOLÓGICO DE LA VERDAD Y LA OBJETIVIDAD: UN ANÁLISIS CRÍTICO AL DISCURSO DESDE HUMBERTO MATURANA Y FRANCISCO VARELA. | 23 |
| CONCLUSIONES | 25 |
| REFERENCIAS | 26 |

INTRODUCCIÓN

Dentro del sistema legal contemporáneo en Colombia, los litigios en general se encuentran en una etapa de transformación y transición gracias a la llegada del nuevo Código General del Proceso. La cual de encuentra enfocada a la priorización de la celeridad, la eficiencia y la oralidad. Elementos que buscan simplificar la actividad judicial del país, descongestionar los despachos judiciales, y hacer más efectivo el acceso a la justicia. En los cambios que se presentan, se presenta a modo de adición la declaración de parte como un mecanismo probatorio que pretende, a nivel general, garantizar que las partes puedan aportar discursos y elementos que pueden ser de relevancia para el litigio en cuestión.

Y es en este periodo de transición que el papel del operador judicial adquiere un mayor protagonismo, pues es él quien toma las directrices necesarias para cumplir con las finalidades que se propone este nuevo sistema de juzgamiento. Sin embargo, esto implica nuevos desafíos en cuanto a la garantía de un juicio justo, pues se está innovando en una forma de apreciación probatoria sin precedentes. Dentro de los cuales, se pueden clasificar en los siguientes dos escenarios posibles que pueden presentar cierta dificultad para el operador judicial dentro de un litigio:

1. La necesidad por parte del juez para valorar si la presencia de determinadas incoherencias en la declaración obedece a un falso testimonio o, por el contrario, pueden presentarse por factores como: la confusión de quien está declarando; los propios nervios de la parte al acudir a la diligencia judicial; la falta de preparación de la parte para la atención de dicha diligencia; el grado de emoción de la parte con respecto a su declaración de los hechos; entre otras más.
2. El eventual caso en el que la declaración de las partes sea el único medio eficaz para demostrar la verdad sobre un hecho jurídicamente relevante para el caso; ya sea por la ausencia de otros medios de prueba, o porque los mismos hayan sido declarados nulos. Y en especial medida cuando ambas partes presentan declaraciones que controvierten lo manifestado por la contraparte. Como puede presentarse, por ejemplo, en procesos monitorios, donde se busca declarar la existencia de una deuda que no se encuentra debidamente incorporada en un título valor; o en procesos penales en donde gran parte del material

probatorio reside en las declaraciones tanto de la parte denunciante como de la parte sindicada.

Bajo estos motivos, el juez dentro de sus herramientas debe contar con mecanismos de análisis tanto jurisprudenciales como doctrinales, que le permitan esclarecer la verdad de los hechos que se pretenden demostrar a través de estos elementos materiales probatorios. Siendo así que la presente investigación tiene como problema la determinación de establecer si es posible llegar a determinar la verdad de un hecho desde el medio probatorio de la declaración de parte de conformidad con las teorías de la verdad vigentes. Tomando en consideración general que la verdad (que también puede llegar a ser denominada como realidad), desde una perspectiva neoaristotélica, no puede ser separada del concepto de justicia o “lo justo”, pues a partir de esta primera se llega a la justicia como materialización de la igualdad y del bien común, elementos que configuran la finalidad del Derecho mismo (Castaño-Bedoya, 2013, pp. 19-21).

Para lo cual, se determinarán los aspectos normativos, jurisprudenciales y doctrinales que tiene esta reciente incorporación probatoria dentro del ordenamiento jurídico colombiano, indicando y explicando sus elementos fundamentales. Así mismo, se expondrán y detallarán las teorías de la verdad en cuanto a su aplicación dentro del ordenamiento jurídico colombiano, siendo estas las siguientes: las teorías presentadas por Juan Nicolás y María Frápolli (teorías de las correspondencia, teorías proporcionales, teorías fenomenológicas, teorías hermenéuticas, teorías de la coherencia, teorías pragmáticas y teorías intersubjetivas); las teorías de la verdad procesal y la determinación de hechos verdaderos dentro del proceso de Michelle Taruffo y, las teorías de la verdad y la objetividad enfocadas a la interacción biológico-social del sujeto frente a su entorno expuestas por Humberto Maturana y Francisco Varela.

El método a emplear en la siguiente investigación corresponde al dogmático jurídico, en la especialidad doctrinal-teórica expuesta por Manuel Sánchez Zorrilla en La metodología de la investigación jurídica: características peculiares y pautas generales para investigar en derecho. La anterior forma de investigación, corresponde a un estudio sobre un fenómeno jurídico en particular a partir del uso del método científico para comprobar o refutar una hipótesis planteada por el mismo investigador. En ese sentido, para el caso en particular, la hipótesis propuesta consiste en que el sistema actual en materia del manejo de la declaración de parte como medio probatorio presenta dificultades frente al uso de los criterios de verdad y objetividad durante el desarrollo de los juicios de sana crítica, debido a un problema en su alcance epistemológico que complejiza la determinación de un hecho percibido por un sujeto como verdadero. Y más aún cuando se observa que el Derecho (desde la óptica de Massini) no puede dejar de observarse desde sus mismas dimensiones o principios entitativos, siendo estos los siguientes (Castaño-Bedoya, 2013, pp. 22-23):

- a. **Principio material.** Con el cual se determina que la existencia de los derechos se encuentra en la dimensión práctica del hombre, pues se materializan a través de su razón, voluntad y práctica.
- b. **Principio formal.** El cual establece que la causa deóntica propia que determina al derecho como lo que es, es la del mandato u ordenación a obrar en pro del bien común, así como su encaminamiento de dichas premisas en el sentido de la justicia como fin propio de la sociedad política.
- c. **Principio eficiente.** Que determina la génesis del Derecho en la propia norma jurídica que determine su contenido prescriptivo, así como del título jurídico, el cual precede y manifiesta la existencia de un derecho en sentido estricto.
- d. **Principio final.** El cual otorga el sentido a la actividad de los agentes, además que justifica su existencia (dentro del entorno o “ecosistema del derecho”), a través de la figura de la justicia como derrotero que debe materializar la comunidad (en especial los operadores judiciales).

Razón por la cual, en el desarrollo de todo el documento se encargará de realizar un análisis conceptual, guiado por los referentes legales, jurisprudenciales y doctrinales (libros académicos, artículos indexados, y demás similares).

1. ELEMENTOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN EL DERECHO PROCESAL COLOMBIANO: UN ABORDAJE DESDE SUS ELEMENTOS NORMATIVOS Y DOCTRINALES

Si fuera posible establecer las dinámicas de la declaración de parte dentro del sistema jurídico colombiano de forma sustanciada, es posible dilucidar, a primera vista, que es un medio probatorio con un alto nivel de complejidad, cuyo nacimiento es completamente reciente, y que parte de un conjunto de necesidades procesales que fueron el producto de la evolución social y tecnológica que ha tenido el país dentro de los últimos años, donde la búsqueda de celeridad ha contribuido como uno de sus principales catalizadores (Lizarazo González, 2017). Eventos que no solamente reformaron la perspectiva en la que se estaba viendo el proceso judicial como tal, también en las dinámicas que debe ofrecer el Derecho como medio de solución de controversias (Peláez Hernández, 2015). Razón por la cual para establecer dicho panorama resulta necesario contrastar, desde la doctrina, sus elementos y cambios más relevantes, que derivaron en la estructura normativa que se tiene hoy en día.

1.1. Elementos Doctrinales de la Declaración de Parte

Para ello, la doctrina ha establecido que la “*Declaración Judicial*”, en su sentido más amplio, como aquella pronunciación o manifestación de un sujeto ante una autoridad judicial sobre determinados hechos o situaciones que se encuentran bajo su conocimiento directo o se espera que sean conocidos por este, cuyo contenido pueden ser tanto favorable como desfavorable para sí mismo o para terceros (Ossorio, 1982, pp. 199-202). Dichas manifestaciones, desde el aspecto teórico, no se limitan a una mera enunciación por vía verbal, sino que estas pueden pronunciarse por otros medios como los escritos o por lenguaje de señas³ (Ossorio, 1982, p. 202), los cuales facilitan al declarante la capacidad de expresarse sobre las situaciones que son relevantes para el caso en particular.

En ese sentido, es posible inferir que el sujeto declarante bajo esta noción general es indeterminado, pues puede ser tanto una parte, como un tercero o un perito; sin embargo, al hablar propiamente de una declaración de parte, el mismo concepto limita el sujeto que puede ofrecer dicha declaración a las partes dentro del proceso, haciendo entonces una primera diferenciación entre lo que es este medio probatorio con un testimonio o una declaración frente a un dictamen pericial, que también son una formas de declaración judicial, pero sus sujetos declarantes son los terceros y los peritos, respectivamente (Parra Quijano, 2014; Devis Echandía & Alvarado Velloso, 2000).

Ahora bien, vale la pena reiterar que la declaración de parte como un medio probatorio es una construcción jurídica y doctrinal bastante reciente para el caso colombiano, por lo que es de esperar que la literatura que se ha establecido sobre su naturaleza sea bastante limitada en este sentido. Sin embargo, es posible determinarla a partir del contexto histórico por el cual surge dicha figura, teniendo en cuenta las diferenciaciones con otras figuras que le precedieron y su innovación con la llegada del Código General del Proceso (C.G.P.).

Al analizar las apreciaciones doctrinarias sobre el ya derogado Código de Procedimiento Civil (C.P.C.), es posible dilucidar que el concepto de declaración de parte es un elemento extremadamente vinculado al medio probatorio de la confesión (Giraldo Montoya, Escudero Martínez, Camacho Torres, Duarte Hernández, & González Arango,

³ Sin embargo, autores como Giraldo Montoya, Escudero Martínez, Camacho Torres, Duarte Hernández y González Arango (2015) expresan y limitan el ejercicio de la declaración de parte a: “*la narración oral sobre los hechos que se debaten en un proceso*” (p. 78).

2015); pues adquiriría relevancia únicamente cuando se presentaban declaraciones que provoquen⁴ un resultado desfavorable para la parte que los pronuncia, creando así la manifestación de un “*hecho confeso*”⁵ a partir del mecanismo del interrogatorio (Borja Niño, 2001; De Pina, 1941, p. 164).

Dicha confesión, de conformidad con Parra Quijano (2014), adquiriría (y adquiere) una doble naturaleza dependiendo del tipo del proceso en el que esta fuera aceptada como prueba, siendo estas la naturaleza civil y la naturaleza penal. En cuanto a la naturaleza civil, explica que esta posee las siguientes características: *a) puede ser producida por cualquiera de las partes dentro del proceso, ya sea demandante o demandada; b) que las afirmaciones para que sean consideradas debe, o bien perjudicar su propia situación en el proceso, o beneficiar la situación de la contraparte y, c) que esta puede ser tanto simple (con la mera afirmación del hecho) o explicada (agregando detalles y explicaciones que pueden cambiar y afectar algunos detalles menores, pero jurídicamente relevantes)* (Parra Quijano, 2014, pp. 394-395); así mismo, se le otorga una noción de indivisibilidad por cuanto los detalles que guarden relación con el hecho confeso deberán ser igualmente tenidos en cuenta por el juez junto a la confesión en sí, salvo que exista prueba en contrario que pueda desvirtuarlas (pp. 395-396). De igual forma, los hechos que no guarden la relación previamente mencionada, se tendrán considerados como una mera declaración de parte (p. 396).

Por otro lado, en materia penal, para que una declaración de parte tuviera efectos probatorios como confesión necesitaba de una serie de aspectos fundamentales, siendo estos: *a) que esta fuera expresada únicamente por el sujeto al cual se le imputa un hecho punible; b) que el sujeto anteriormente mencionado, de forma libre y espontánea, admitiera su participación (ya sea como autor o partícipe) de los hechos delictivos objeto*

⁴ En este punto vale la pena señalar que la declaración de parte y su vínculo con la confesión, se trata de una prueba de naturaleza provocada (Giraldo Montoya, Escudero Martínez, Camacho Torres, Duarte Hernández, & González Arango, 2015, p. 79); es decir, que surge a partir de la propia obligación que tiene el sujeto declarante a manifestar su conocimiento sobre un hecho del que se le interroga, mas no de la propia libertad del mismo (Parra Quijano, 2014, pp. 324-325).

⁵ Como bien lo explica Abal Oliú (2014), el alcance de la confesión sin vicios de ningún tipo permite establecer que sobre el hecho admitido no existe controversia alguna que el operador deba dirimir, por lo que se presume como cierto, pasando así a la evaluación de otros hechos cuyos elementos probatorios ameriten la apreciación del juez (p. 33).

de la imputación y, c) que dicha declaración no necesariamente requiere que el sujeto confesor admitiera su culpabilidad (Parra Quijano, 2014, p. 384); del mismo modo que esta se encuentra dotada de una “indivisibilidad”, prohibiendo que el juez valore de forma separada y sesgada las afirmaciones declaradas en la confesión, ya sean estas favorables o desfavorables; razón por la que deben ser igualmente tenidas en cuenta salvo que exista prueba que fácticamente desestime sus enunciados (pp. 384-385).

En resumidas cuentas, podría comprenderse la Declaración de Parte en el anterior procedimiento civil como un elemento probatorio de apreciación selectiva, pues todo su contenido no se tomaría en cuenta dentro del criterio decisorio del Juez, salvo que cumpliera con todas las características enunciadas previamente (Sanabria Villamizar & Jiménez Escalante, 2018, p. 74). El cual, bajo la visión de la prudencia (Phronesis) aplicada al derecho de Massini (2006, como se citó en Castaño-Bedoya, 2016), la actividad de selección y valoración probatoria que ejerce el operador se encuentra dentro de la segunda etapa de la obtención del conocimiento, donde un juicio defectuoso o ausente puede afectar la calidad del conocimiento obtenido (p. 154-155).

No obstante, los cambios propuestos en el mismo C.G.P. reformaron la naturaleza propia de la declaración de parte, pasando de ser un elemento derivado sin importancia para el proceso salvo para la obtención de una confesión, a ser un medio probatorio de carácter independiente de esta última, a pesar de que sus reglas y modos de producción sean los mismos. Esto quiere decir que dentro del ejercicio de un interrogatorio de parte (el cual vendría siendo el modo o mecanismos de producción probatoria), es posible obtener dos pruebas diferentes: la confesión y la declaración de parte, teniendo valoraciones completamente diferentes⁶ (Sanabria Villamizar & Jiménez Escalante, 2018, p. 76).

Becerra Carvajal, Jiménez Escalante, y Ramírez López (2018) igualmente afirman que dentro de la implementación de la oralidad del sistema mixto del C.G.P. permite adoptar un

⁶ Esta supone una de las tesis que han desarrollado la doctrina jurídica colombiana frente a este medio probatorio; pues también se ha establecido que realmente no existe una diferencia teórica entre la declaración de parte antes y después del Código General del Proceso, pues el Código de Procedimiento civil permitía la valoración de dicho elemento a partir del principio de libertad probatoria (Sanabria Villamizar & Jiménez Escalante, 2018, p. 76).

mayor protagonismo de las partes dentro del proceso, facilitándoles una interacción directa dentro del mismo donde tienen la oportunidad de pronunciarse y ser escuchados, además de ser valorados bajo el sistema de valoración libre de la prueba, donde las pruebas obtenidas deberán apreciarse conjuntamente bajo las reglas mismas de la sana crítica⁷ (p. 76), de igual forma que el acercamiento elimina procedimientos innecesarios⁸ en pro de una mayor descongestión judicial, que dentro del contexto colombiano ha sido un problema muy crítico de la administración de justicia (González Jaramillo, 2018).

1.2. Elementos Normativos de la Declaración de Parte

Ahora bien, la normatividad colombiana reciente, en especial con la reciente entrada en vigencia del Código General del Proceso, (Ley 1564 de 2012) es posible extraer algunas características primordiales para entender este medio probatorio, las cuales son la materialización efectiva de todo el discurso doctrinal que fue expuesto previamente, sirviendo como un punto de inflexión y evolución en materia probatoria (Sanabria Villamizar & Jiménez Escalante, 2018, p. 69).

Así, con el propósito de no hacer una reiteración de lo ya expuesto en la parte doctrinal de la declaración de parte, se hará apenas una mera enunciación y descripción de los preceptos jurídicos que aborda la más reciente norma procesal, para tener así un punto de referencia. Siendo así los siguientes:

Art. 11: Que establece la obligación de interpretación de las reglas procesales para la satisfacción de las normas sustanciales y de los principios constitucionales y generales del derecho procesal. Pasando a ser un marco de límites generales frente a la capacidad de apreciación del Juez de orden no procesal que busca como fin último la no vulneración de derechos y garantías previamente adquiridos.

⁷ A modo general, se entiende las reglas de la sana crítica como aquella operación de carácter u orden intelectual, por el cual el juez, quien es el único que puede desarrollarla, dentro de un criterio lógico y de su propia experiencia, realiza un análisis interpretativo y motivado de los discursos presentados dentro de un elemento, con el propósito de validar o negar su grado de verdad frente a los hechos que se manifiestan (Reina Cortez, Guerra Portillo, & Guzman Sandoval, 1993, p. 82).

⁸ Dichas reducciones a los procedimientos se conocen de forma general como le ejercicio del principio de economía procesal, principio que procura el uso mínimo y necesario de los trámites que garanticen la correcta tutela de los derechos que se pretenden proteger mediante la acción judicial (Carretero Pérez, 1971).

Art. 164: Que obliga a la necesidad de dirigir la decisión judicial usando únicamente las pruebas recogidas sin violación del debido proceso y allegadas en las correspondientes oportunidades procesales. Siendo este, a diferencia de los límites impuestos dentro del artículo 11, una limitante de carácter procesal, que restringe las declaraciones que se deben apreciar a las que se pronunciaron dentro de la correspondiente oportunidad procesal, dejando a un lado aquellas que se hagan por fuera de dichos límites garantizando así el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

Art. 184, en concordancia con el artículo 198 y siguientes de la ley procesal: siendo estos los que se encargan de dar las reglas generales sobre la declaración de parte. Esta se dará mediante el uso de un interrogatorio que se hará sobre los hechos materia del proceso. Esta podrá ser tanto solicitada por las partes como declarada de oficio por el propio juez. Este se conformará por hasta 20 preguntas de carácter verbal que serán desarrolladas durante la audiencia respectiva, donde cada una deberá corresponder individualmente a un solo hecho o afirmación. Estas igualmente deberán ser claras, precisas, conducentes y pertinentes para el proceso como tal, so pena de que sean tanto objetadas por la contraparte como desestimadas de forma directa por el juez de conocimiento.

Art. 191, inc. final: El cual establece la declaración de parte como un medio probatorio que se debe analizar de forma independiente a la confesión. Usando para ello las reglas generales de apreciación de las pruebas, dentro de las que se encuentran las propias reglas de la sana crítica que han tenido su desarrollo dentro de la jurisprudencia constitucional, como se apreciará en el siguiente capítulo.

2. ASPECTOS JURISPRUDENCIALES DE LA DECLARACIÓN DE PARTE EN COLOMBIA: EVOLUCIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL MEDIO DE PRUEBA

Sin lugar a dudas, la construcción del concepto de la declaración de parte ha sido en gran medida contribución de los órganos de cierre de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, al tratarse de un fenómeno jurídico relativamente novedoso, los aspectos que se enuncian en dichas jurisprudencias, hacen parte de su naturaleza previa con el Código de Procedimiento Civil. Por un lado, la Sentencia de Constitucionalidad 599 del 20 de agosto

del 2009, donde los actores, en ejercicio de la Acción Pública de Inconstitucionalidad demandan la norma consagrada en el Artículo 208, parágrafo 6 del Código de Procedimiento Civil que, aunque ya no es un texto vigente sirve de referente para la presente investigación. El texto demandado es el siguiente: “Si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o inconducentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente con prevención sobre los efectos de su renuencia” (Corte Constitucional, Sala Plena, C-559, 2009).

Los accionantes aseguran que la disposición constriñe u obliga al testigo a contestar todas las preguntas que se le realicen durante la práctica de la prueba testimonial por parte del juez ya sea de oficio o de parte o ya sean realizadas por las partes; pues la norma debe obligar al testigo solo cuando las preguntas realizadas al mismo se encuentren ajustadas al régimen procesal y probatorio colombiano, cuando no afecten derechos y cuando no contravengan el Sistema Normativo de la Carta Mayor (Corte Constitucional, Sala Plena, C-559, 2009).

En opinión de los accionantes la disposición demandada vulnera el artículo 33 de la Carta Política, cuyo alcance no se limita al campo penal, sino que se extiende a todas las ramas del derecho, tales como la civil, laboral o disciplinaria, razón por lo que el declarante puede negarse a responder cualquier pregunta que comprometa su responsabilidad y la de los parientes. Afirman, que la mencionada es violatoria de los artículos 29 y 74 de la Constitución, pues desconocen las garantías procesales de las personas a las que se les debe guardar el secreto profesional, obligando al testigo a través de amonestación por parte del juez a que responda dicho interrogatorio y “en un eventual juicio sobre la personal la cual debe guardarse secreto profesional se puede usar tal medio probatorio como prueba trasladada”, además, se violan las disposiciones del artículo 74 de la Carta, que consagra la inviolabilidad del secreto profesional (Corte Constitucional, Sala Plena, C-559, 2009).

Por su parte, en la mencionada sentencia la Corte Constitucional delimita el objeto de la declaración de parte así: “El interrogatorio o declaración de parte tiene por objeto obtener de los demandantes o demandados la versión sobre los hechos relacionados con el proceso y puede llegar a configurar una confesión, siempre y cuando recaiga sobre hechos que perjudican al declarante o favorezcan a la parte contraria y se cumplan los demás requisitos

señalados por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil” (Corte Constitucional, Sala Plena, C-559, 2009).

De lo anterior es posible dilucidar que como cualquier otro medio de prueba la declaración de parte suministra certeza al juez sobre la verdad de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda o de las excepciones. Es decir, busca formar el convencimiento judicial respecto de la realización de determinados hechos que interesan al proceso, pues constituyen el sustento de las peticiones presentadas por las partes dentro del mismo.

La Corporación hace variadas intervenciones respecto del tema, uno de estos es el preceptuado en la sentencia de Constitucionalidad 927 del 2000, donde el accionante, en ejercicio de la Acción Pública de Inconstitucionalidad, demandó la inconstitucionalidad de los artículos 207, incisos 1, 2, 3 y 5, parciales; 226, incisos 1 y 2, parciales; y, 227, inciso 3, parcial, del Código de Procedimiento Civil (Corte Constitucional, Sala Plena, C-927, 2000).

Considera el demandante, que los apartes acusados del artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, vulneran la Constitución Política, como quiera que el límite natural y lógico para que el solicitante de un interrogatorio de parte pueda sustituir el pliego contentivo de las preguntas, por otro, ya sea total o parcialmente, es hasta la terminación de dicha diligencia, por cuanto durante su desarrollo es factible la intervención del solicitante, por lo tanto, considera que cualquier otro límite es caprichoso e ilógico (Corte Constitucional, Sala Plena, C-927, 2000).

En concepto del accionante, el límite de preguntas dentro de un interrogatorio de parte no puede ser de cantidad sino de calidad y en ese orden de ideas, basta que las preguntas sean conducentes, pertinentes, útiles, claras y concisas, pues de lo que se trata es de llegar a la verdad real del asunto que se debate en el proceso judicial, dándole primacía al derecho sustancial sobre el meramente formal, con acatamiento y respeto al debido proceso (Corte Constitucional, Sala Plena, C-927, 2000).

Manifiesta el demandante que la limitación en el número de preguntas imposibilita que varias personas puedan interrogar, cómo podría ser el caso de un concordato de acreedores,

evento en el cual, quienes objeten uno o varios créditos y, como prueba soliciten el interrogatorio de parte del deudor y del respectivo acreedor, una vez agotado el tope máximo de veinte preguntas, serían varios los acreedores objetantes a quienes no se les permitiría formular ni una sola pregunta, circunstancia que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa, contradicción y primacía del derecho sustancial (Corte Constitucional, Sala Plena, C-927, 2000).

Finalmente señala el actor, que teniendo en cuenta que las decisiones que toma el operador jurídico pueden contener errores judiciales⁹, se torna irrazonable y arbitrario el hecho de prohibir la interposición de cualquier recurso contra esas decisiones, lo que equivale a vencer a quien interroga sin ser oído en juicio, situación inadmisible en un Estado de Derecho, porque de esa forma, se conculca el derecho al debido proceso de quien interroga (Corte Constitucional, Sala Plena, C-927, 2000).

Dentro de las consideraciones de la Corte se hace necesario precisar que el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil, establece que sirve como medio de prueba, entre otros, la declaración de parte, medio este, a través del cual, las partes pretenden o procurar obtener la confesión de los hechos que se debaten dentro del proceso. Este medio o instrumento para provocar la confesión de la contraparte, puede, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 179 ibidem, ser decretada la petición de parte o, de oficio cuando el operador jurídico lo estime útil para la verificación de los supuestos fácticos alegados por las partes. En el primero de los casos, esto es, cuando es decretada a petición de parte, podrá ser solicitada dentro de la oportunidad para pedir pruebas en la primera instancia o, en la segunda instancia, pero solo en los casos que establece el artículo 361 del mismo Código (Corte Constitucional, Sala Plena, C-927, 2000). Cuando el interrogatorio es decretado de oficio por el juez o magistrado, podrá hacerse entonces en las oportunidades que establece el artículo 180 del C. de P.C.

Adicionalmente, la Corte ha llevado un análisis extenso de las reglas de la sana crítica, elemento fundamental para el análisis de este tipo de pruebas, como se vio en los aspectos

⁹ Considerando adicionalmente que el error judicial, desde la perspectiva iusnaturalista, es una actividad que va en contra de las nociones básicas de la racionalidad humana, las cuales, dentro de la relación bidireccional de naturaleza humana-justicia, supondría un alejamiento de esa “realidad práctica” que se exige dentro de la búsqueda de la justicia (Castaño bedoya, 2013 pp. 69-71)

doctrinales y normativos. Por lo cual se hará una enunciación de los aspectos más relevantes recopilados por la corporación.

La sentencia SU-355/2017, que profundiza sobre el aspecto del análisis de las reglas de la sana crítica, aclarando que dichos elementos corresponden a un punto o categoría intermedia entre lo que se conoce como la prueba legal y la libre convicción. Así mismo, distingue que el uso de la sana crítica no implica un ejercicio arbitrario de la facultad jurisdiccional, sino que este debe ser adecuadamente motivado tanto en los criterios que se tomarán en cuenta para la apreciación probatoria, como en la decisión en sí misma. Buscando entonces un ejercicio racional y certero por parte del operador judicial (Corte Constitucional, Sala Plena, SU-355, 2017).

Así se considera bajo los ojos de dicha sentencia como manifestación de la arbitrariedad judicial si dentro del ejercicio de valoración probatoria existe ignorancia de la presencia de una de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, pues se vulnera los fundamentos generales de la administración de justicia, así como la especial protección de los derechos fundamentales como máximos bienes jurídicos del Estado Social de Derecho (Corte Constitucional, Sala Plena, SU-355, 2017).

Para ello, la sentencia T-708/2010, en concordancia con la sentencia T-916/2008, propone tres reglas generales con las cuales se puede establecer un correcto estudio del material probatorio bajo los aspectos de la sana crítica. Siendo estas las siguientes (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, T-708, 2010; Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, T-708, 2010):

- a. Que los criterios de evaluación sean de orden objetivo. Es decir, que no sean originados bajo meras suposiciones o falsos razonamientos.
- b. Así mismo, que los criterios en cuestión sean racionales, lo cual se traduce en que estos sean capaces de ponderar la magnitud y el impacto de las pruebas que se pretenden evaluar bajo dicho mecanismo.

- c. Y finalmente, que estos sean rigurosos, siendo así que en su orientación materialicen los principios, reglas y demás deberes contenidos en la función de la administración de justicia.

3. LAS TEORÍAS ACTUALES DE LA VERDAD DENTRO DE LA DECLARACIÓN DE PARTE

Si bien, se han observado con detenimiento aspectos generales de la declaración de parte, existen diversos detalles que no son apreciables desde una perspectiva absolutamente teórica. En principio, podría decirse que la declaración de parte, es una manifestación de la teoría de Mauro Cappelletti (2002, como se citó en

García Odgers, 2012) el cual afirma que, dentro del contexto de la oralidad procesal¹⁰, la manifestación de las partes es relevante al tener en cuenta que, por su propio interés en el proceso, son quienes tienen un mayor conocimiento sobre los hechos objeto del litigio, siendo así que no pueden ser meramente descartados en el análisis probatorio (p.157). Sin embargo, lo anteriormente dicho no excluye la posibilidad de que sean las mismas partes las que puedan hacer omisiones, alteraciones o adiciones de forma intencionada a sus declaraciones que no correspondan a la realidad con el propósito de favorecer sus propios intereses, poniendo dentro del contexto teórico un marco de discrecionalidad y cuidado frente a adoptar las declaraciones de las propias partes como un elemento probatorio fiable (Taruffo, 2008, p. 67).

A estas alturas, el hecho de que dicho medio de prueba pueda presentar dichos inconvenientes es bastante interesante de estudiar, y más cuando se considera que la verdad resulta en un elemento indispensable de la justicia, de los instrumentos procesales y, por

¹⁰ A dicho contexto vale la pena adicionar, a modo de digesto, que el sistema oral que hace mención Cappelletti es un sistema relativamente reciente para la tradición jurídica continental del *Civil Law*, siendo esta una adopción traída del sistema anglosajón del *Common Law*. La cual terminó siendo una alternativa a los sistemas jurídicos de predominancia escrita, donde la necesidad de tener registros documentales fidedignos conllevó a la prohibición de la consideración de la [declaración de partes como pruebas válidas por la imposibilidad material de que estas pudieran ser corroboradas como verdaderas o falsas](#) (Marín Verdugo, 2010, pp. 137-138).

tanto, de la decisión judicial (Taruffo, 2012, p. 70; Matheus López, 2002, p. 326). A lo anterior, se suma el hecho de que hoy en día, no es posible establecer un parámetro único de verdad o, mejor dicho, que en relación con el derecho no existe una teoría unívoca que describa una metodología para que el operador judicial identifique si determinados hechos son verdaderos o falsos (Nicolás & Frápolli, 1997, p. 150). Ante esta pluralidad de teorías de la verdad, resulta necesario identificar cada una de ellas a fin de establecer si son aplicables o no dentro de la apreciación judicial.

3.1. *Las Teorías de la Verdad Desde Nicolás y Frápolli.*

Una de las principales teorías de la verdad se encuentra en los postulados de Juan Nicolás y María Frápolli. De acuerdo con sus afirmaciones las metodologías para el acceso de la verdad en el Derecho se encuentran clasificadas en siete grupos importantes (Nicolás & Frápolli, 1997, pp. 154-155), las cuales son:

Las teorías de la correspondencia: estas teorías, como su nombre lo indica, establecen una relación proposicional correspondiente; traducíéndose en que una premisa es verdadera siempre y cuando tenga el carácter de ser plausible con determinados hechos o con la realidad misma, manifestando así una relación significado-objeto (S-O), que dentro de las clasificaciones filosóficas corresponde a la ontología aristotélica en su sentido más puro donde se considera a los procesos lingüísticos como “fieles predicados de la realidad” (Nicolás & Frápolli, 1997, pp. 154-159).

Así dentro de la filosofía del derecho a nivel general, se destaca la labor de Kalinowski y Massini como exponentes de dicha corriente pues, tal cual indica Castaño-Bedoya, el lenguaje normativo se transforma en una estructura cuyo contenido plasma la determinación de las conductas que se regulan, así como estandarizar a partir de esta su determinación (Massini, 1994, como se citó en Castaño-Bedoya, 2013, p. 103).

Dicha teoría aterrizada al contexto de la declaración de parte como mecanismo de búsqueda de la verdad, indicaría que su contenido declarativo sería considerado bajo la

apreciación judicial como verdadera, siempre y cuando existan circunstancias en los hechos que ayuden a determinar su plausibilidad dentro del mundo real. Esto podría verificarse o falsearse a partir de un contraste con otros elementos materiales probatorios que puedan recrear o reproducir con exactitud la realidad que se enuncia (como podrían ser las fotografías o vídeos), siendo así una teoría bastante limitada con respecto a la realidad jurídica de este medio probatorio, pues dicho método sería imposible de aplicar en declaraciones cuyo contenido no pueda ser verificable de dicha forma.

Las teorías pro-oracionales: también conocidas como deflacionistas o de la redundancia, no indican propiamente establecer qué es la verdad por sí misma, sino que intenta establecer lo verdadero como tal, de acuerdo a los parámetros lógico-semánticos; así, los enunciados “es verdadero” o “es falso” carecen de un contenido o significado específico, y su única función es de servir como operadores pro-oracionales que, de igual forma que se usan los pronombres, buscan eliminar redundancias que presentan las oraciones en su lenguaje natural cuando es requerida su formalización en un lenguaje más técnico (Nicolás & Frápolli, 1997, pp. 159-162). Dichas teorías no adquieren un punto de relevancia frente a su aplicabilidad en la determinación de la verdad a partir de las declaraciones de parte como se observó en las teorías de la correspondencia, salvo para simplificar o amplificar proposicionalmente las declaraciones para una eventual evaluación lógico-formal.

Las teorías fenomenológicas: estas teorías se caracterizan por la predominancia del elemento de la evidencia propuesto por la obra de Husserl, como principal elemento de la satisfacción de la información para que sea considerada verdadera en una situación de gradualidad de la verdad que no es en ningún momento estricta o, en otras palabras el producto de una acción inteligible en donde se busca la concordancia o coincidencia absoluta entre el fenómeno percibido y lo que se razona del mismo, o su aproximación máxima posible (Nicolás & Frápolli, 1997, pp. 159-162). Por tanto, el contenido de una declaración de parte será ciertamente verdadero cuando existan pruebas disponibles que confirmen dicho estado de cosas; y ante mayor sea la calidad y cantidad de dichas pruebas, más verdadero es hasta llegar al punto de lo “evidente”.

Dicha teoría no constituiría como tal una aplicación precisa para determinar la verdad de un elemento probatorio, sino que usaría a dicho elemento probatorio para alcanzar el mayor grado de evidencia en un hecho. Por lo que su aplicación estricta dentro de la declaración de parte no es posible de forma aislada.

Las teorías hermenéuticas: este grupo de teorías es el más difícil de denominar de las clasificaciones de Nicolás y Frápolli. Pues la verdad se manifiesta como un ente que solo ocurre cuando se cumplen los siguientes requisitos: una manifestación de algo preexistente a la razón y segundo, que en un enunciado posterior se plasman fidedignamente dichas manifestaciones. Por tanto, la verdad va mucho más allá de la presencia o no de una situación de correspondencia, para lo cual se requiere un ejercicio de apertura libre por parte del ente que lo percibe (sin direccionamientos arbitrarios) que permita desvelar su esencia y construir su respectiva adecuación lingüística (Nicolás & Frápolli, 1997, pp. 164-166).

Ahora bien, resulta difícil aplicar dicha teoría al campo probatorio; pues el conocimiento del juez no puede considerarse lo suficientemente directo para determinar la esencia pura de los hechos, sino que está directamente vinculada a la experiencia sensible de quien percibió los hechos objeto de la declaración. Haciendo que la esencia que se exige analizar pueda estar viciada con direccionamientos arbitrarios ajenos enfocados no a la búsqueda de la verdad sino al favorecimiento de un interés particular como un grado de riesgo.

Las teorías de la coherencia: estas teorías se caracterizan por ignorar la necesidad de demostrar la verdad a partir del objeto como se hacía en las teorías de la correspondencia; por el contrario, utiliza las relaciones entre un conjunto de proposiciones con el fin de establecer su contenido de verdad como validez, afirmando entonces que lo críticamente importante yace en la adecuada relación de validez lógica entre los propios enunciados y sus correspondientes reglas del lenguaje. En otras palabras, solo una conclusión es verdadera sí y solo sí el discurso que hace parte de ella es válido (Nicolás & Frápolli, 1997, pp. 166-169).

Dicha teoría, en su aspecto más fundamental, sería la más idónea hasta el momento para el análisis de la verdad de las declaraciones de parte, pues el contenido que se debe analizar corresponde a un nivel proposicional. Sin embargo, su dificultad se encuentra que las relaciones de verdad, dentro del campo probatorio (como se verá a partir de las teorías de verdad de Taruffo), no necesariamente van a atender a un criterio de validez lógico-formal. Pero sí es posible poner en tela de juicio la verdad de un argumento cuando presente graves contradicciones que afectan su validez.

Las teorías pragmáticas: estas teorías se encargan de amplificar el espectro de análisis de la verdad o falsedad de una proposición, pues de acuerdo con los postulados deja de ser una conclusión aislada por sus criterios determinantes, y dentro de su análisis entran aspectos tanto objetivos como subjetivos que enriquecen el mismo. En otras palabras, la realidad como elemento fundamental para la determinación de la verdad es producto de un rendimiento práctico, el cual se va construyendo y direccionando de forma constante e independiente de la propia observación del sujeto (Nicolás & Frápolli, 1997, pp. 170-173). Dentro de este conjunto de teorías, no es posible apreciar una aplicación concreta de forma aislada, sin embargo, dentro del análisis de la teoría de la verdad de Taruffo, va a tener un papel fundamental para la determinación de la veracidad de un supuesto fáctico en el ámbito procesal.

Las teorías intersubjetivas: finalmente, estas teorías fundamentan la relación de la verdad en base a la estructura del discurso y la argumentación, siguiendo los criterios de autores como Habermas; porque en su aspecto teleológico, buscan eliminar consideraciones que sean superfluas, estableciendo una estrecha relación triangular entre verdad, validez y las reglas lógicas de la comunicación. Por tanto, la verdad no proviene de un ejercicio individual, sino que esta se origina a partir del desarrollo de las interacciones comunicativas entre los sujetos, que no solo ayudan a definir lo que es verdadero, también establecen sus formas y criterios de valoración (Nicolás & Frápolli, 1997, pp. 173-176). Siendo un ejemplo aproximado los análisis jurisprudenciales que determinan a partir del discurso de sus consideraciones los límites, alcances, y aspectos para la valoración de las pruebas, que luego serán empleados por los demás operadores judiciales en el ejercicio de la administración de justicia.

Con el estudio de estas teorías de la verdad, es posible apreciar a primera vista que la determinación de la verdad en este medio de prueba resulta un ejercicio bastante riguroso como complejo, bajo el entendido de que el juez no puede de forma discrecional admitir los hechos que se relatan durante el desarrollo de la declaración de parte, sino que debe realizar un ejercicio lógico racional de dichos hechos para llegar a admitirlos o no dentro de los valores veritativos, siendo así, la teoría de la coherencia el método por excelencia para su ejercicio. No obstante, la aplicación de las demás teorías de la verdad va a depender de las situaciones probatorias de cada caso en concreto, los hechos que se manifiesten en dicha declaración, su relación con otros medios de prueba dentro del proceso, su estructura formal lingüística, entre otros criterios. Así, el Juez mantiene cierta discrecionalidad para determinar cuál es el método teórico adecuado para dicho análisis, satisfaciendo a simple vista el criterio de libertad probatoria y las reglas de la sana crítica que se establecen dentro de la jurisprudencia colombiana. No obstante, se han apreciado ciertas limitantes e impedimentos que posteriormente Taruffo dentro de su estudio del derecho probatorio y la verdad intentó perfeccionar, y que han constituido un referente importante dentro de la doctrina vigente.

3.2. *Las Teorías de la Verdad Desde Taruffo.*

Por otro lado, Michelle Taruffo ofrece otra versión sobre las consideraciones de la verdad dentro de los medios de prueba. Para él, en términos generales, el desarrollo de “la verdad” en la prueba implica en primer lugar que su determinación acarrea en el caso en concreto unos efectos procesales ya establecidos por la norma (Taruffo, 2008, p. 67); en segundo lugar, que el desarrollo de esa operación por parte del Juez parte de que antes del proceso de análisis de los medios de prueba establece una hipótesis previas del caso, las cuales irá afirmando o negando conforme establezca las verdades sobre las afirmaciones que componen hechos (Taruffo, 2012, pp. 182-183) y, que la cuestión de la verdad dentro del aspecto procesal va a ser un aspecto relativo donde predominará, como en cualquier otra ciencia, cuánta información de calidad se encuentra a su disposición, siendo entonces una relación directamente proporcional entre la calidad-cantidad de dichos datos o recursos

que se emplean con el “grado de verdadero” que se pueda concluir de un enunciado (Taruffo, 2010, p. 99).

El principal fundamento para el establecimiento de dichas posturas frente a la determinación de la verdad, parte del punto de que los mismos criterios de objetividad dentro de un proceso están determinados por los esquemas de pensamiento y los juicios de valor, lo que implica que el desarrollo de un análisis está bastante vinculado a las necesidades contextuales de cada proceso (Gascón Abellán, 2003, p. 46). Esto no quiere decir que el operador se guíe bajo criterios de subjetividad que terminen en arbitrios infundados, sino todo lo contrario, que a partir del desarrollo de la inmediación probatoria extraiga factores que bajo un criterio epistemológico se encuentren aceptables, y determinar bajo esos mismos criterios la verdad o falsedad de los hechos (Taruffo, 2003, p. 81-86).

En términos simples, el ejercicio que se propone a partir de la verdad en Taruffo es un aspecto reconstructivo del hecho al concepto, desde la impresión sensible del operador judicial, aunque se resalta que la verdad dentro de la prueba no es suficiente para determinar un criterio de valoración de la prueba, aunque no deja de ser importante, pues la determinación de un hecho no proviene del hecho en sí, sino de las afirmaciones que se enuncian sobre el hecho (Vargas Ávila, 2011, p. 137).

Esto lo traduce Ferrer Beltrán (2006) al especificar que la verdad dentro de la prueba es un concepto difícil para el desarrollo judicial pues, tanto en las ciencias puras como en las humanas, la verdad tiene matices metodológicos que impiden su conocimiento absoluto. Por ello, hace un distanciamiento sobre *la verdad*, como un valor de carácter axiomático y que no tiene una materialización completamente pura dentro del plano del Derecho¹¹, siendo esta la materialización de la teoría de la correspondencia, de *lo considerado como verdadero* que es, en términos simples, la conclusión del ejercicio llevado a cabo por parte del operador judicial al estudiar el enunciado probatorio (que se entendería como la idea o el hecho que se pretende probar), con los elementos que se aportan para su defensa o contradicción, derivando en que lo declarado verdadero va a depender directamente de cuánto material probatorio hay disponible para la apreciación del enunciado, además del

¹¹ También denominada como verdad material o verdad *tout court* (Ferrer Beltrán, 2006, p. 13).

ejercicio de convencimiento que realicen las partes interesadas para que este se decante sobre una hipótesis u otra y, que en virtud de dicho ejercicio, lo declarado verdadero puede coincidir o no con la verdad en sentido abstracto (Ferrer Beltrán, 2006, pp. 31-40).

Aterrizando estas concepciones de Taruffo a la práctica con el medio de prueba de la declaración de parte, abre una nueva posibilidad y es que ofrece una expansión a las teorías de la verdad propuestas por Nicolás y Frápolli; pues aparte de establecer fundamentos para el establecimiento de una verdad procesal objetiva y crítica, propone un principio de alcance razonable de la información obtenida en la etapa de análisis probatorio; es decir, que no es posible extender el alcance interpretativo del contenido del medio de prueba más allá de lo perceptible por el juez. Así mismo, dentro del ejercicio de considerar una declaración de parte como verdadera, implicaría en la realidad, que el juez puede usar herramientas como otros elementos materiales probatorios que haya considerado como verdaderos previamente para indicar si existen coincidencias y contradicciones (desarrollando entonces una “*teoría de la coherencia*” taruffiana) en caso de que existan otros materiales probatorios, así como puede apelar al aspecto del convencimiento de las partes en pugna cuando se trata de casos en los que no existen otros elementos probatorios o los que existen dentro del proceso no guardan una relación con el hecho o afirmación que se pretende demostrar.

Complementando lo anteriormente dicho, en la teoría de la coherencia de Taruffo no resulta relevante la plausividad del enunciado con la realidad, sino que el observador del enunciado debe comprobar que no existan contradicciones que permitan desconfiar de la veracidad del mismo; tal cual ocurriría si en una declaración judicial la parte o el testigo afirmara que ocurrió *p* y a la vez no ocurrió *p*, siendo *p* un elemento fundamental para decidir sobre el caso y en donde no existen otros medios que permitan aclarar dicha contradicción (pp. 26-28). Aterrizando y fusionando, en cierto grado, las ideas propuestas tanto en las teorías de la correspondencia como en las teorías pro-oracionales y pragmáticas expuestas por Nicolás y Frápolli, mostrando que se puede establecer una teoría de la verdad aplicada este tipo de prácticas probatorias.

Sin embargo, la propuesta metodológica de Taruffo trae consigo una limitante que será expuesta por Humberto Maturana y Francisco Varela, biólogos que se han encargado de

estudiar cómo el ser humano, desde su estructura biológica, desarrollan la actividad del conocer, además de valorar la verdad y la objetividad. Temas que serán abordados en el siguiente capítulo.

4. *EL PROBLEMA EPISTEMOLÓGICO DE LA VERDAD Y LA OBJETIVIDAD: UN ANÁLISIS CRÍTICO AL DISCURSO DESDE HUMBERTO MATURANA Y FRANCISCO VARELA.*

Como punto fundamental para entender la teoría de la verdad y la objetividad por parte de Maturana y Varela, se necesita comprender las complejas redes de interacciones que ocurren tanto dentro de nosotros, como por fuera de nosotros, entre nosotros y con todo lo demás. Dichas relaciones, denominadas como acoplamientos estructurales, establecen como nuestras estructuras, desde las más básicas (como serían las estructuras moleculares o entre unidades autopoieticas) hasta las más complejas (como serían las estructuras sociales, o del mismo lenguaje) se encuentran en una constante interacción entre sí mismas y su entorno, generando cambios e intercambios progresivos que, a la larga, determinan la forma en la que nos desarrollamos, observamos, comunicamos, e incluso conocemos (Maturana & Varela, 1984, pp. 50, 112, 140). En otras palabras, nuestra acción del conocimiento de la realidad, está direccionada por la interacción constante de nuestra estructura biológica, social, lingüística, etc. Haciendo que no podamos percibir los fenómenos en sí, sino lo que nuestros sistemas nos permiten percibir.

Lo anteriormente mencionado, es explicado por los autores al afirmar que:

(...) estas experiencias –o muchas otras similares– contienen de una manera capsular todo el sabor esencial de lo que queremos decir. Porque nos están mostrando de qué manera nuestra experiencia está amarrada a nuestra estructura de forma indisoluble. No vemos el “espacio” del mundo, vivimos nuestro campo visual; no vemos los “colores” del mundo, vivimos nuestro espectro cromático. Sin lugar a dudas, (...) estamos en un mundo. Pero, cuando examinemos más de cerca cómo es que llegamos a conocer ese mundo, siempre nos encontraremos con que no podemos separar nuestra historia de acciones –biológicas y sociales – de cómo nos

aparece ese mundo. Es tan obvio y cercano que es lo más difícil de ver. (Maturana & Varela, 1984, p. 10).

Así mismo, estas correlaciones generan de forma consecuente una serie de afirmaciones que, replantean o reestructuran la noción clásica de la objetividad como la existencia que es independiente de la participación de su observador (objetividad trascendental), pues el mismo, a partir de sus con los objetos, sujetos y demás seres y fenómenos, que podemos distinguir las percepciones de las ilusiones únicamente cuando tenemos experiencias previas que nos referencian dicha clasificación, las cuales, a su vez, están guiadas por otras experiencias previas (Maturana, 1997, p. 23).

En ese sentido, de acuerdo con Ortiz Ocaña, la nueva epistemología que se propone implica que las nociones actuales de objetividad son conceptos completamente sesgados, los cuales ignoran una serie de procesos internos que modelan, configuran y reconfiguran nuestra percepción, la cual, nunca fue una fotografía exacta y pura de la realidad (Ortiz Ocaña, 2017).

Adicionalmente, Maturana trae consigo que nuestras actividades, en principio, no son del todo racionales; pues la racionalidad, surge como una manifestación derivada de nuestras interacciones lingüísticas, las cuales, a su vez, se originaron en nuestros intereses personales y emociones básicas que se desarrollaron conforme se acoplaban nuestras estructuras sociales, concluyendo entonces que somos principalmente seres emocionales (Maturana, 1997).

Ante este panorama, resulta necesario preguntarse entonces: ¿es posible establecer una valoración de verdad a partir de unas declaraciones que, por la naturaleza de nuestra estructura humana, no cumplen con el criterio de objetividad trascendental que se esperaría? La respuesta es bastante compleja, pues si bien autores como Taruffo, abordan de forma cercana, algunos aspectos de la verdad como un concepto relativo, no llegan a satisfacer los detalles y magnitudes que presenta una visión de la objetividad en base al observador.

Dentro de la declaración de parte, la percepción del sujeto declarante y sus intereses es un aspecto enteramente fundamental para el ejercicio probatorio. Sin embargo, esa

dificultad que tiene el ser humano para la diferenciación entre precepciones e ilusiones puede ser un problema para la determinación de hechos verdaderos por parte del juez (en nuestra doctrina vigente) si no existen otros elementos probatorios que puedan servir como referentes adicionales. Por lo cual, se podría considerar que existen dos grandes vicios que se pueden presentar dentro de la practica probatoria: el primero, la modificación de la declaración para favorecer ilegítimamente los intereses de la parte y segundo, los sesgos que pueden presentar las partes (e incluso el mismo juez) dentro de su propio ejercicio de percepción e interpretación jurídica de los hechos al ser organismos cuya objetividad se encuentra delimitada por sus condiciones tanto físico-biológicas como sociales, donde sus emociones, conocimientos e incluso discapacidades podrían terminar afectando sus apreciaciones sobre el mismo.

CONCLUSIONES

Finalmente, se puede llegar a razonar que tratar la verdad desde este medio de prueba es un asunto complicado, pues dependiendo de la postura epistemológica, puede presentarse tanto soluciones como problemas. Por un lado, nos encontramos con doctrinas propias del Derecho como son las de Taruffo que intentan, desde una perspectiva filosófico-jurídica, aterrizar la noción de verdad (o más bien de la consideración de enunciados verdaderos a un ejercicio donde el juez debe hacer un análisis valorativo del ecosistema probatorio que tiene para el caso en concreto, donde las reglas de la sana crítica juegan un papel fundamental para la interpretación de los diferentes hechos o enunciados jurídicos. Siendo entonces que para los casos fáciles pueden entrarse a consideración para la valoración los demás elementos probatorios para la identificación de contradicciones, así como de coincidencias y, para los casos difíciles, el ejercicio del convencimiento de las partes puede ser una alternativa útil mientras se sigan los lineamientos establecidos por las reglas constitucionales en materia probatoria.

En contraste, las teorías epistemológicas de Maturana y Varela presentan una problemática de magnitud desde una epistemología biológica; pues sus conceptos, en un ámbito general, desvirtúan en gran parte las teorías epistemológicas desarrolladas para el

derecho contemporáneo en Colombia. Razón por la cual, si se quiere adoptar una postura epistemológica cercana a las nociones presentadas de la objetividad basada en el acoplamiento estructural de los individuos, requiere de un replanteamiento de lo que se consideraría verdadero, de sus metodologías de estudio, e incluso de la reestructuración de las reglas de la sana crítica. Elementos que pueden ser estudiados en una investigación más especializada.

REFERENCIAS

Abal Oliú, A. (2014). Prueba por declaración de parte. *Revista de Derecho Segunda Época*, 9(9), 13-54.

Becerra Carvajal, D. Y., Jiménez Escalante, J. T., & Ramírez López, D. (2018). *Reglas de producción probatoria de la delcaración de parte en el Código General del Proceso: anomias y una propuesta de solución*. Cúcuta: Universidad Libre.

Borja Niño, M. A. (2001). *La prueba en el Derecho colombiano Tomo III: declaración de parte, confesión y testimonio*. Bucaramanga: (Sic) Editorial.

Carretero Pérez, A. (1971). El principio de economía procesal en lo contencioso-administrativo. *Revista de administración pública*(65), 99-142.

Castaño-Bedoya, A. (2016). Introducción a la Razón Prudencial. La virtud necesaria para conocer la verdad práctica del derecho. . En J. Cianciardo, J. B. Etcheverry, P. Rivas, J. Saldaña Serrano, & P. Zambrno, *Filosofía Práctica del Derecho. Estudios sobre la teoría jurídica contemporánea a partir de las ideas de Carlos Igancio Massini Correas* (pp. 149-169). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Castaño-Bedoya, A. (2013). *Introducción a al razón práctica del Derecho: una perspectiva del iusnaturalismo renovado*. Bogotá: Escuela de Filosofía y Humanidades, Universidad Sergio Arboleda.

Corte Constitucional, Sala Plena, (12 de julio de 2000) Sentencia C-927 [MP Alfredo Beltrán Sierra]

Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, (18 de septiembre de 2008) Sentencia T-916 [MP Clara Inés Vargas Hernández]

Corte Constitucional, Sala Plena, (20 de agosto de 2009) Sentencia C-559 [MP Nilson Pinilla Pinilla]

- Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, (8 de septiembre de 2010) Sentencia T-708 [MP Jorge Ivan Palacio Palacio]
- Corte Constitucional, Sala Plena, (25 de mayo de 2017) Sentencia SU-355 [MP Ivan Humberto Escrucería Mayolo]
- De Pina, R. (1941). La Prueba de Confesión en el PRoceso Civil. *Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia*.(11), 163-176.
- Devis Echandía, H., & Alvarado Velloso, A. (2000). *Compendio de la Prueba Judicial Tomo I* (octava ed., Vol. I). Buenos Aires: Rubinzal & Culzoni Editores.
- Ferrer Beltrán, J. (2006). La valoración de la prueba: verdad de los enunciados probatorios y justificación de la decisión. En J. Ferrer Beltrán, M. Gascón Abellán, D. Gonzáles Lagier, & M. Taruffo, *Estudios sobre la prueba* (pp. 1-40). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- García Odgers, R. (2012). El testimonio de las partes en juicio propio. Análisis histórico comparativo a partir de las experiencias de Inglaterra y Austria. *Revista Iuris et Praxis*, 18(2), 147-188.
- Gascón Abellán, M. (2003). Concepciones de la prueba. Observación a propósito de algunas consideraciones sobre la relación de prueba y verdad, de Michele Taruffo. *Discusiones: prueba y conocimiento*(3), 43-54.
- Giraldo Montoya, C., Escudero Martínez, C., Camacho Torres, G., Duarte Hernández, M., & González Arango, G. (2015). *Derecho Probatorio*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- González Jaramillo, J. L. (2018). La declaración de parte en el sistema procesal civil colombiano. *Diálogos de Derecho y Política*(21), 7-23.
- Lizarazo González, L. M. (2017). Algunos Cambios Generados por la Entrada en Vigencia del Código General del Proceso. *Respositorio de la Universidad Católica de Colombia*.
- Marín Verdugo, F. (2010). Declaración de la parte como medio de prueba. *Revista Ius et Praxis*, 16(1), 125-170.
- Matheus López, C. A. (2002). Sobre la función y objeto de la prueba. *Revista de la Facultad de Derecho PUCP*(55), 323-338.
- Maturana, H. (1997). *La objetividad: un argumento para obligar*. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones.

- Maturana, H., & Varela, F. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. . Buenos Aires: Lumen - Editorial Universitaria.
- Nicolás, J., & Frápolli, M. (1997). El estado de la cuestión: teorías actuales de la verdad. *Diálogo Filosófico*(38), 148-178.
- Ortíz Ocaña, A. (2017). ¿objetividad en las ciencias humanas y sociales? Una reflexión desde la obra de Humberto Maturana. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIII(3).
- Ossorio, M. (1982). Definiciones de Declaración y Declaración Judicial. En *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*. (pp. 199-202). Buenos Aires: Editorial Heliasta.
- Parra Quijano, J. (2014). *Manual de Derecho Probatorio* (Decimaoctava ed.). Bogotá: Librería Ediciones del Profesional.
- Peláez Hernández, R. A. (2015). *Elementos Teóricos del Proceso Tomo I Parte General: teoría general del proceso y Derecho procesal civil general* (segunda ed., Vol. I). Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley.
- Reina Cortez, J., Guerra Portillo, I. X., & Guzman Sandoval, L. B. (1993). Innovaciones que presenta la declaración de parte en el proceso civil y mercantil. *trabajo de graduación para obtener el título de licenciado en ciencias jurídicas*. El Salvador: Universidad de El Salvador.
- Sanabria Villamizar, R. J., & Jiménez Escalante, J. T. (2018). La declaración de parte como medio de prueba en el derecho procesal civil iberoamericano. Aportes para su estudio en el código general del proceso colombiano. *Revista Academia & Derecho*, 9(16), 67-102.
- Taruffo, M. (2003). Algunos comentarios sobre la valoración de la prueba. *Discusiones: Prueba y Conocimiento*(3), 81-97.
- Taruffo, M. (2008). *La prueba*. (L. Manríquez, & J. Ferrer Beltrán, Trans.) Madrid, España: Marcial Pons.
- Taruffo, M. (2010). *Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos*. (D. Accatino Scaglioti, Trad.) Madrid, España: Marcial Pons.
- Taruffo, M. (2012). *Proceso y decisión: lecciones mexicanas de Derecho Procesal*. Madrid, España: Marcial Pons.
- Vargas Ávila, R. (2011). Concepciones de la prueba judicial. *Prolegómenos - Derechos y Valores*, II, 135-148.

